



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

D. ALFONSO RAMOS DE MOLINS SAINZ DE BARANDA, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

CERTIFICA:

Que en la Sesión N° 39/04 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 28 de octubre de 2004, se ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Por el cual se aprueba la siguiente

RESOLUCIÓN ADOPTANDO MEDIDAS CAUTELARES CON RESPECTO A LAS CONDICIONES DE APLICACIÓN DEL RECARGO POR EL USO DE TERMINALES DE USO PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN DE LLAMADAS GRATUITAS PARA EL LLAMANTE (Expediente AEM 2004/1681)

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 3 de septiembre de 2004, tuvo entrada en el Registro de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones un escrito remitido por TELE2 TELECOMMUNICATION SERVICES S.L. (en adelante TELE 2) por el cual, en virtud de la Resolución de 31 de marzo de 2004 que modificó la Oferta de Interconexión de Referencia en cuanto a la retribución asociada a terminales de uso público en llamadas gratuitas para el llamante, se solicita a esta Comisión que intervenga para: (i) analizar si Telefónica esta llevando a cabo prácticas o conductas restrictivas de la competencia y/o discriminatorias. (ii) para que en caso de que realizado el análisis solicitado anteriormente se concluya con la necesidad de abrir el correspondiente procedimiento administrativo, se proceda a adoptar medida cautelar tendente a suspender, hasta la Resolución del Expediente, la aplicación a TELE2 de la compensación a terminales de uso público para servicios gratuitos para los usuarios llamantes. La referida operadora aporta Acta Notarial por la que pretenden constatar el hecho de que Telefónica de España, SAU (en adelante, Telefónica)



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

no aplica a sus clientes el recargo aprobado por esta Comisión para llamadas desde terminales de uso público dirigidas a números gratuitos (800, 900 y cortos).

Segundo.- Con fecha 8 de septiembre de 2004 tuvo entrada en el Registro de la CMT escrito de CITYCALL TELECOMUNICACIONES, S.L. (en adelante, CITYCALL), por el que se solicita que esta Comisión ponga fin a la discriminación anticompetitiva en el traslado del recargo por el uso de terminales de uso público para llamadas a numeración gratuita para el llamante desarrollada por el Grupo Telefónica, y que imponga al Grupo Telefónica la obligación de respetar el principio de no discriminación en el traslado en cascada a través de la interconexión de la retribución asociada a terminales de uso público en llamadas gratuitas para el llamante. En concreto, que tanto TTP como Telefónica, si deciden dar traslado de la retribución, deberían hacerlo a todas las entidades que participan en la cadena de valor, tanto a terceros operadores como a sí mismos y a sus revendedores.

Tercero.- Con fecha 17 de septiembre de 2004 tuvo entrada en el Registro de la CMT un escrito de JAZZ TELECOM, S.A.U (en adelante, JAZZTEL), por el que se solicita que se proceda a la apertura de un expediente informativo y adopte medidas cautelares para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que se refiere su escrito. Con el fin de demostrar la no aplicación del recargo por parte de Telefónica durante el mes de agosto, Jazztel levantó Acta Notarial con fecha 5 de agosto de 2004.

Cuarto.- Con fecha 18 de septiembre de 2004 tuvo entrada en el Registro de la CMT un escrito de MORE MINUTES COMMUNICATIONS S.L. (en adelante, MORE MINUTES), en el que se solicita intervención para que sea de aplicación efectiva a todos los revendedores de minutos, la compensación aprobada por esta Comisión sin discriminación alguna, ya que de no ser así y en un plazo muy corto, los revendedores de minutos de Telefónica se quedarán en una posición dominante, eliminando del mercado al resto, ya que cualquier usuario final solicitará aquellos productos que no tengan recargo de compensación.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 69.2 de la LRJPAC, esta Comisión dispuso, el pasado 21 de septiembre, la apertura de un período de información previa para conocer la posible existencia de comportamiento anticompetitivo por parte de Telefónica. Para ello se invitó a dicho operador a realizar las alegaciones que considerase oportunas y a aportar la documentación relativa a:

- Especificación de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas de los contratos realizados entre el Operador y sus distribuidores de tarjetas antes y después de la aplicación efectiva de la Resolución de 31 de



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

marzo de 2004, relativa a la retribución asociada a los terminales de uso público por las llamadas gratuitas para el llamante.

- Justificación del pago recibido de sus distribuidores de tarjetas desde la aplicación efectiva de la compensación a terminales de uso público por llamadas realizadas desde dichos terminales a números gratuitos para el usuario llamante.
- Justificación del pago realizado a TTP por la compensación especificada en la Resolución de 31 de marzo de 2004.

Sexto.- Con fecha 23 de septiembre de 2004, se recibió en el Registro de esta Comisión escrito presentado en nombre y representación de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (en adelante, ASTEL), por el que solicita que se le tenga como interesado en el procedimiento relativo al trámite de información previa referido a problemas detectados en la aplicación del recargo por compensación por uso de terminales de uso público.

Séptimo.- Mediante escritos que tuvieron entrada en esta Comisión los días 24 y 27 de septiembre de 2004, las entidades ASTEL, AZUTEL DE ESPAÑA, S.L. (en adelante, AZUTEL) y COMUNITEL GLOBAL, S.A (en adelante, COMUNITEL) respectivamente, presentaron una serie de alegaciones que fueren incorporadas al presente procedimiento. Para probar que el número de minutos ofrecido por los distribuidores de Telefónica es el mismo con independencia de si esa tarjeta es usada desde un terminal público o privado, ASTEL y COMUNITEL aportaron Acta Notarial en la que se pone en evidencia que las tarjetas denominadas “1004”, “Telecard”, “Activa 100x100”, “Exclusiva” y “Happy Card” ofrecían el mismo número de minutos por el mismo precio.

Octavo.- Con fecha 29 de septiembre tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito presentado en nombre y representación de BT España Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U (en adelante, BT) por el que se solicita que: (i) Se imponga a Telefónica la obligación de trasladar desde el 1 de agosto de 2004 el recargo por compensación por el uso de terminales de uso público en llamadas gratuitas para el llamante desde terminales de uso público, (ii) Se inicie un procedimiento de información previa a un procedimiento sancionador para determinar los incumplimientos llevados a cabo por parte de Telefónica.

Noveno.- Con fecha 30 de septiembre de 2004 y 1 de octubre de 2004, se recibió en el Registro de esta Comisión escrito presentado en nombre y representación de ORBITEL COMUNICACIONES LATINOAMERICANAS, S.A.U (en adelante, ORBITEL), y de COLT TELECOM ESPAÑA, S.A.U. (en adelante, COLT) respectivamente, por los que solicitan que se les tenga como



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

interesados en el procedimiento relativo al trámite de información previa referido a problemas detectados en la aplicación del recargo por compensación por uso de terminales de uso público.

Décimo.- Con fecha 1 de octubre de 2004, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, Telefónica) por el que solicita una ampliación de plazo por el plazo máximo legalmente previsto dada la complejidad del asunto y la necesidad de recopilar datos e información relevante para el adecuado análisis de los hechos.

Undécimo.- Con fecha 5 de octubre se concedió una ampliación de plazo de 5 días a Telefónica.

Duodécimo.- Con fecha 5 de octubre de 2004, tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de MCI Worldcom (Spain) S.A. (en adelante, MCI Worldcom) por el que solita que se le tenga como parte interesada en el procedimiento relativo al trámite de información previa y que se ponga fin en el más breve plazo a la estrategia anticompetitiva del Grupo Telefónica al tiempo que se inicie expediente sancionador.

Decimotercero.- El pasado 5 de octubre de 2004, se recibió en el Registro de esta Comisión, escrito de Tele 2 por el que presentaba pruebas relativas a los anuncios publicitarios que Telefónica realiza en las revistas de la edición Lazo Latino de julio, agosto y septiembre de 2004 en las que se puede comprobar la no disminución de minutos a aplicar a los usuarios finales para compensar el recargo para llamadas a números gratuitos desde terminales de uso público.

Decimocuarto.- Con fecha 7 de octubre tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de Telefónica por el que solicita que, a la vista de la información aportada, proceda a archivar las denuncias presentadas.

Decimoquinto.- Con fecha 8 de octubre tuvo entrada en el Registro de esta Comisión escrito de SPANTEL 2000, S.A (en adelante, SPANTEL) por el que solita que se le tenga como parte interesada en el procedimiento relativo al trámite de información previa.

Decimosexto.- Con fecha 28 de octubre de 2004, el Consejo de esta Comisión emitió Resolución por la que se incoaba expediente para analizar el comportamiento de Telefónica con relación a las denuncias presentadas por los operadores, por ASTEL y por algunos mayoristas revendedores de tráfico de telefonía de uso público en relación con las condiciones de aplicación del recargo de 4,79 céntimos de euro por minuto en concepto de compensación por el uso de terminales de uso público para llamadas gratuitas para el llamante para estudiar la posible existencia de algún trato discriminatorio de Telefónica a favor de sus Agentes-Distribuidores.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Habilitación Competencial

De conformidad con la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la habilitación competencial de esta Comisión para la tramitación del presente procedimiento se encuentra recogida en el artículo 48.3. e) que establece que corresponde a esta Comisión *“adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la pluralidad de oferta del servicio, el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas por los operadores, la interconexión de las redes y la explotación de la red en condiciones de red abierta”*.

Asimismo, la CMT adecuará sus actuaciones a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante, LJPAC) de conformidad con el artículo 48.1. de la citada Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

Segundo.- Habilitación competencial para la adopción de medidas cautelares

El artículo 31 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado mediante Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre (en adelante RCMT), habilitan a esta Comisión para, en el ejercicio de sus funciones, adoptar de oficio o a instancia de los interesados, una vez iniciado el correspondiente procedimiento, *“las medidas cautelares que estime oportunas para asegurar la eficacia (...) de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”*.

Según el mismo artículo 31 del RCMT dichas medidas cautelares podrán consistir en órdenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el daño que pudieran causar las conductas a que se refiere el procedimiento o en la imposición de fianza de cualquier clase, excepto la personal, que sea bastante para responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran causar.

Por último, el citado artículo 31 impide dictar medidas cautelares que puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

De acuerdo con el artículo 2 del RCMT, esta Comisión, en el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, adecuará sus actuaciones a lo previsto en la LRJPAC.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Conforme a las previsiones contenidas en el artículo 72 de la citada LRJPAC,

“1. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolverlo podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello”.

Tercero. Concurrencia de los elementos que justifican la adopción de la medida cautelar

III.1 Elementos que deben concurrir para justificar la adopción de una medida cautelar

La presente Resolución tiene por objeto la adopción de una medida cautelar. Para poder adoptar la misma, es necesario que concurran en el presente expediente todos los elementos necesarios que justifican la adopción de una medida cautelar, y que vienen recogidos en el artículo 72 LRJPAC. Dichos elementos son los siguientes:

- La existencia de elementos de juicio suficientes para adoptar la citada medida cautelar;
- La necesidad de la medida para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer;
- La inexistencia de perjuicios de difícil o imposible reparación para los interesados o de efectos que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.

El Tribunal Constitucional ha interpretado el régimen de adopción de medidas cautelares considerando que no se produce vulneración de derechos constitucionales, incluso en el caso de que se tomen sin audiencia de las partes, siempre que:

- Exista una norma jurídica que permita su adopción;
- Se adopten las medidas cautelares por resolución en derecho; y
- Se basen en un juicio de razonabilidad en cuanto a la finalidad perseguida y circunstancias concurrentes.

En los apartados posteriores se analizará la concurrencia relativa a la adopción de medidas cautelares de los elementos aquí citados, con el fin de determinar la procedencia de su adopción.



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

III.1.1 Razonabilidad y apariencia de buen derecho

Como se ha puesto de manifiesto en los Antecedentes de Hecho, el objeto del presente procedimiento consiste en examinar la presunta comisión de prácticas anticompetitivas por parte de Telefónica.

En concreto, la práctica denunciada por los diferentes operadores se concreta en una conducta eventualmente discriminatoria atribuida a Telefónica, por la cual dicha entidad no estaría trasladando a sus Agentes-Distribuidores autorizados de tarjetas telefónicas el recargo por la compensación a los terminales de uso público.

Según menciona Telefónica *“no existe obligación para que, como operador asignatario de numeración gratuita, repercuta a sus clientes suscriptores estas cantidades, ya que según la página 11 de la Resolución de 31 de marzo de 2004: “... la obligación inicial de compensar recaerá sobre el operador de red inteligente, quien discrecionalmente podrá repercutir tal cantidad en los precios que cobre al suscriptor de números de cobro revertido”. Asimismo, según considera la citada entidad, “los denunciantes pretenden ahora generar un cambio de la Resolución para establecer la obligación a cargo de la referida Operadora”.*

Esta Comisión no pretende juzgar el modelo de negocio adoptado por Telefónica con respecto a la comercialización de sus tarjetas telefónicas, sino únicamente las implicaciones y consecuencias de la aplicación de dicho modelo en el sector de las telecomunicaciones.

En este sentido, la libertad de elección atribuida a los operadores de red inteligente, incluido Telefónica, de trasladar a los suscriptores de números de red inteligente, el recargo en concepto compensación a los titulares de terminales de uso público, presenta ciertas diferencias en el caso de esta última entidad con respecto al resto de operadores.

En efecto, la decisión de Telefónica de trasladar o no dicho recargo a los citados suscriptores de números de red inteligente no puede gozar del mismo grado de discrecionalidad que la decisión que puedan adoptar otros operadores de red inteligente.

En este sentido, es preciso recordar aquí que, Telefónica es operador dominante en el mercado de redes y servicios telefónicos fijos disponibles al público, de conformidad con la Resolución de 11 de septiembre de 2003¹. Las obligaciones derivadas de ostentar tal condición se encuentran actualmente

¹ Resolución sobre los operadores que, a los efectos de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones, tienen la consideración de dominantes en los mercados de servicios de redes y servicios de telefonía fija, alquiler de circuitos, telefonía móvil automática y servicios de interconexión (OM 2003/465)



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

vigentes en el ámbito del nuevo marco regulador de conformidad con la Disposición Transitoria Primera, Apartado 3, de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, que establece que *“los mercados de referencia actualmente existentes, los operadores dominantes en dichos mercados y las obligaciones que tienen impuestas dichos operadores continuarán en vigor hasta que, en los términos fijados en el título II, se fijen los nuevos mercados de referencia, las empresas con poder significativo en dichos mercados y sus obligaciones”*.

Es preciso recordar aquí que Telefónica, como operador dominante en el mercado de servicios de telefonía fija, está sometida a los principios generales que rigen el acceso a redes o a los servicios de telecomunicaciones disponibles al público. Así, el artículo 6 del Reglamento de Interconexión y acceso a redes aprobado por Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio (en adelante, Reglamento de Interconexión), establece que:

“1. Las condiciones de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones o a los servicios de telecomunicaciones disponibles al público, deberán fundarse en los principios generales de objetividad, transparencia, proporcionalidad y no discriminación”.

Por tanto, de conformidad con lo anterior, Telefónica está sometida a la obligación de suministrar accesos a su red y a los servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones que lo soliciten en condiciones objetivas, transparentes, proporcionales y no discriminatorias.

De esta forma, por aplicación de los preceptos que recogen la citada obligación de no discriminación en el suministro de acceso a redes y a los servicios de telecomunicaciones atribuible a los operadores dominantes, entre ellos Telefónica, y las condiciones de suministro de dicho acceso y dichos servicios, así como reiteradamente ha señalado esta Comisión², no resulta admisible que dicha entidad aplique condiciones de prestación del servicio telefónico disponible al público diferentes a las figuras intermedias que ésta utiliza para comercializar sus tarjetas telefónicas (Agentes-Distribuidores). De esta forma, la eventual falta de aplicación a los citados Agentes-Distribuidores, del recargo en concepto de compensación a los titulares de terminales de uso público constituiría una conducta anticompetitiva desarrollada en el mercado del servicio telefónico fijo materializada en una práctica discriminatoria al aplicar Telefónica a dichas entidades condiciones de suministro del servicio telefónico diferentes de las aplicadas al resto de entidades.

² Véanse, entre otras, las Resoluciones de 29 de abril de 2002 (Exp. 2002/6634), 24 de abril de 2003 (Exp. 2002/7633) y 20 de noviembre de 2003 (Exp. 2003/928).



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

En efecto, por la realización de dicha conducta resultarían afectados:

- (i) Los competidores de Telefónica en la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público. En efecto, dichas entidades se verán privadas del tráfico generado a través de las tarjetas telefónicas al trasladar el recargo a los suscriptores de números de red inteligente, provocando así que dichos suscriptores contraten los servicios de Telefónica al no estar ésta cobrando el citado recargo, o asumirán el recargo como un coste propio, originando una considerable desventaja competitiva de dichas entidades frente al operador dominante.
- (ii) Las entidades dedicadas a la comercialización de dichas tarjetas, que se verán obligadas a contratar los servicios de Telefónica y a cursar el 100% de su tráfico por Telefónica.

Por último, no cabe considerar que la práctica que eventualmente lleva a cabo Telefónica se incardina en el mercado de servicios de telefonía fija prestado a través de tarjetas prepago, pues supondría determinar el mercado relevante, no a partir del producto ofrecido en él, sino a partir de los canales de comercialización del mismo.

De lo anterior, cabe concluir que Telefónica está obligada a facilitar a las entidades dedicadas a la comercialización de tarjetas telefónicas, el servicio telefónico en condiciones no discriminatorias, de forma que dichas condiciones sean las mismas que las que esta misma entidad o sus filiales y demás empresas pertenecientes a su grupo utilizan para prestar servicios equivalentes.

III.1.2. Necesidad y urgencia de la medida cautelar a adoptar.

A la vista de la información contenida en el expediente AEM 2004/1491, no es posible determinar, a priori, si efectivamente ha existido discriminación por parte de Telefónica en la exigencia del recargo. No obstante, existen indicios de que la aplicación del recargo por parte de la referida Operadora se ha podido realizar de forma discriminatoria en beneficio de sus propios Agentes-Distribuidores.

Debido a que el mercado de las tarjetas telefónicas es un mercado competitivo y muy dinámico, la discriminación en el cobro del recargo puede de una parte, suponer la expulsión de los competidores y por otra perjudicar seriamente la competencia. Es necesaria la adopción de medidas cautelares que aseguren, de manera inmediata, que no existe discriminación en la aplicación del recargo por parte de Telefónica, con el fin de que dicho recargo no sea utilizado para lograr una ventaja competitiva sobre los operadores y/o comercializadores de



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

tarjetas alternativos, de ahí que su adopción debe de ser urgente y a la mayor brevedad para asegurar el efecto útil de la resolución que se dicte.

Existen al menos dos motivos por los que es necesaria la urgencia de adoptar las presentes medidas cautelares: (i) el grave perjuicio que se podría ocasionar a los operadores y/o comercializadores de tarjetas alternativos como consecuencia del fuerte dinamismo y competencia en el mercado y (ii) el posible comportamiento anticompetitivo y discriminatorio del Grupo Telefónica tanto en este mercado como en otros conexos fruto de la aplicación del recargo.

III.1.3. Inexistencia de perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o de efectos que impliquen violación de derechos amparados por las leyes

La adopción de una medida cautelar prescindiendo del trámite de audiencia, no implica indefensión alguna, por cuanto que la medida cautelar supone una verdadera llamada al interesado para que en la tramitación del procedimiento en curso pueda manifestar lo que a su derecho e intereses convenga y, en cualquier caso, siempre está abierta la posibilidad de interponer el correspondiente recurso administrativo o contencioso-administrativo.

En efecto, la no adopción de las presentes medidas cautelares supone agravar la posible desventaja competitiva que sufren los operadores y comercializadores de tarjetas alternativos. Por otra parte, la adopción de esta medida cautelar no sólo no supone para Telefónica un perjuicio de imposible o difícil reparación, sino que, por cuanto que se trata meramente de una consolidación y regulación de pagos hasta la Resolución definitiva que recaerá en los plazos determinados por el procedimiento de urgencia, les evitará además mayores perjuicios en caso de que la Resolución final del procedimiento declare si efectivamente tuvo lugar o no comportamiento discriminatorio por parte del Grupo Telefónica.

En razón de las consideraciones de hecho y de Derecho expuestas, esta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

ACUERDA

Primero.- A partir de 15 días desde la fecha de la presente resolución Telefónica deberá haber cobrado los importes por los recargos generados



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

hasta la fecha de la presente resolución por las llamadas a los números 900/800 desde los terminales de uso público de aquellos titulares que hubieran ejercitado su derecho a dicho recargo, conforme a la resolución de esta Comisión de 31 de marzo de 2004, incluidos los generados por llamadas a números 900/800 desde teléfonos de uso público de la propia TESAU.

Telefónica deberá remitir a esta Comisión en el plazo de 5 días la documentación acreditativa de dichos cobros de acuerdo con el Resuelve Segundo de la presente resolución.

Segundo.- A partir de la fecha de la presente resolución, TESAU facturará el recargo a sus suscriptores de números 900/800 con carácter mensual, siendo la fecha de emisión de las facturas el día 19 o primer día hábil posterior del mes correspondiente.

Dichas facturas habrán de recoger el importe de los recargos correspondientes a los ciclos de consolidación disponibles desde la última factura emitida, siendo la fecha de vencimiento de las facturas la correspondiente a 8 días hábiles con posterioridad a la fecha de emisión.

En la fecha de vencimiento de la factura deberá estar disponible el importe en la cuenta bancaria del operador que factura y será responsabilidad del operador facturado que esto suceda. Si esto no fuese así, a partir de 4 días hábiles se aplicará el interés bancario vigente a la cantidad devengada desde la fecha de vencimiento de la factura.

Tercero.- Telefónica aportará mensualmente a esta Comisión la información contable necesaria relativa a la emisión y cobro de facturas a los suscriptores de sus números 900/800 en concepto de recargo por llamadas a sus números 900/800 con origen en teléfonos de uso público.

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Asimismo, se pone de manifiesto que contra la resolución a la que se refiere el presente certificado, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante esta Comisión en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.17 de la Ley



COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, la Disposición adicional cuarta, apartado 5, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de lo previsto en el número 2 del artículo 58 de la misma Ley.

EL SECRETARIO

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Alfonso Ramos de Molins Sainz de Baranda

Carlos Bustelo García del Real